

Editorial

A un año del pacto entre la DC y el ejército

***E**l mes de marzo de 1980 fue denso en acontecimientos trascendentales para el proceso salvadoreño: la implementación de las reformas, la implantación del Estado de Sitio, el inicio de grandes operativos militares y el asesinato de Mons. Romero son los más destacados. Sin embargo, lo importante no son tanto los hechos en sí —por relevantes que sean cada uno, o todos en su conjunto— cuanto el proyecto que está detrás de ellos y a cuyos lineamientos responden.*

En nuestra opinión, en el mes de marzo de 1980 se esclarece y define el nuevo pacto político, ya establecido en el mes de enero entre la Fuerza Armada y el Partido Demócrata Cristiano, cuyo desarrollo va a cristalizar de hecho en una nueva fase del antiguo proyecto para el país, y que desde la versión formal del pacto se lo entiende como de “represión y reformas”.

El gobierno del 15 de octubre de 1979 surge de una coalición entre la Fuerza Armada y una amplia gama del sector social y político salvadoreño. El reacomodo de fuerzas al interior de cada uno de los sectores coaligados —el militar y el civil— desestabiliza el pacto y provoca la crisis que llevaría a la renuncia de la mayoría de los integrantes del primer gobierno.

El contexto nacional e internacional no favorece el que la Fuerza Armada tome directa y exclusivamente las riendas del poder, y fuertes presiones externas le convencerán de la necesidad de establecer un pacto con fuerzas políticas civiles y moderadas, para salvar las apariencias de una apertura democrática.

Ante la negativa del partido socialdemócrata (MNR) de unirse al nuevo pacto, a pesar de las insistentes presiones, la Fuerza Armada concertará un nuevo pacto exclusivamente con la democracia cristiana, a comienzos de enero de 1980. La democracia cristiana tiene como objetivo principal la realización de reformas estructurales en el país, dentro de cierto marco y de ciertos límites, para lo que está dispuesta a aceptar como mal menor e indispensable una cierta cuota de represión contra los que se opongan a esas reformas o al nuevo orden social. Por su parte, la Fuerza Armada tiene como objetivo principal el mantenimiento del orden y la seguridad así como la salvaguarda de la constitucionalidad que respalda y sostiene a la propia institución armada, y reprimirá y eliminará a todo lo que lo obstaculice, para lo que está dispuesta a permitir ciertas reformas estructurales como medio para disminuir los conflictos sociales y arrebatarse banderas a la izquierda, a la vez que limitar el poder de la oligarquía. Las bases del pacto, por lo tanto, quedan establecidas.

Una cierta dosis de voluntarismo induce a creer al Partido Demócrata Cristiano que podrá realizar las reformas y a la vez mantener en un mínimo la cota de represión. Pero el verdadero poder lo detenta la Fuerza Armada, y el partido no es más que un socio circunstancial, ciertamente con escaso poder social y político. Dejadas a su libre juego las fuerzas del nuevo bloque en el poder, era de esperar que la hegemonía la detentara la Fuerza Armada y que la concreción del pacto derivara más hacia los objetivos de ésta. Sin embargo, el pacto no puede implementarse en los primeros meses, no tanto por la dificultad en completar el equipo de gobierno, cuanto por la falta de claridad y de homogeneidad al interior de los dos sectores pactantes.



En el seno de la Democracia Cristiana existía una profunda división ideológica y pránica. El asesinato de Mario Zamora, la renuncia de Héctor Dada a la Junta y al Partido, la expulsión de la "tendencia popular", las renunciaciones de por lo menos diez de sus altos directivos y miembros del gobierno, dejaría no sólo la unidad ideológica, sino también la hegemonía a la "vieja guardia" del PDC con el virtual ascenso de José Napoleón Duarte a la Junta de Gobierno. Por su parte, al interior de la Fuerza Armada también se produjo en esos meses un reacomodo de fuerzas, hasta lograr la hegemonía el grupo derechista; muchos de los gestores del golpe fueron desplazados, el Comité Permanente de la Fuerza Armada (COPEFA) fue desarticulado, y los principales puestos de mando fueron ocupados por jefes vinculados a gobiernos anteriores; finalmente, el fallido golpe de ultraderecha a finales de febrero derivó poder al grupo conservador, que se consolidó ante la "amenaza" de los ultras. A su vez, la unificación y consolidación creciente de la izquierda, la presentación de su proyecto político, y la perspectiva emergente de constituir una alternativa viable, iba a actuar dialécticamente a favor de la línea dura de la Fuerza Armada.

Es así como a comienzos de marzo se dan ya las condiciones objetivas para que pueda cristalizar el nuevo pacto y se pueda poner en marcha una nueva fase que podemos categorizar como de "exterminio de la oposición, bajo la bandera de reformas y de apertura democrática restringida". Estas banderas son indispensables, no tanto para arrebatárselas a la izquierda cuanto para ofrecer una imagen de "centro" progresista frente a las dos extremas, y así obtener la confianza y el apoyo de gobiernos extranjeros y de la Democracia Cristiana Internacional. Dentro de este contexto deben ser entendidos los trascendentales acontecimientos del mes de marzo de 1980.

Casi a comienzos de ese mes se aprueban los decretos que contienen las principales reformas estructurales: Reforma Agraria, Nacionalización de la Banca, y Nacionalización del Comercio Exterior. Si las honestas intenciones del PDC se realizan con estas medidas, internacionalmente se proyecta la imagen de progresismo y de eficacia de un partido político y civil, al que respalda y secunda todo el aparato militar.

Pero la realidad del mes de marzo evidencia que, bajo la apariencia de las reformas, se institucionaliza sistemáticamente la represión tendiente al exterminio de toda oposición. Las reformas se acompañan simultáneamente de la imposición del Estado de Sitio y de la censura más estricta de los medios de comunicación, incluso para la derecha, lo que no había sucedido en las fases anteriores. Se montan extensos operativos, se militariza el campo, y en varias ocasiones se masacra incluso a campesinos beneficiarios de la reforma agraria. De este tiempo datan los primeros campamentos de refugiados; sólo en el mes de

marzo afluyen a los centros habilitados por la Iglesia, en San Salvador, más de mil campesinos que huyen de la represión y del terror implantado en las zonas rurales. Mons. Romero es asesinado, y en sus funerales se siembra el pánico entre las masas, ante la vista y el testimonio estupefacto y atónito de todo el mundo allí presente o representado. La nueva fase exige la eliminación de todos los obstáculos que pudieran oponérsele, y en ese sentido hay que entender las depuraciones al interior de los dos sectores pactantes —así se explica también la marginación progresiva de la Junta y del ejército de su miembro discordante, el coronel Majano—, la supresión de los medios de expresión opositores —la emisora del Arzobispado es dinamitada y se ataca a los periódicos La Crónica y El Independiente—, los operativos contra los grupos armados de la izquierda se intensifican, y la represión contra dirigentes políticos y contra el pueblo aumenta en forma acelerada.

A un año de la concreción e implementación del nuevo pacto es preciso realizar una evaluación de los logros obtenidos por el mismo.

Las reformas, de acuerdo a estudios evaluativos y científicos realizados —el resumen de uno de ellos se publica en este mismo número de ECA—, o han tenido éxitos muy magros, o han sido verdaderos fracasos: La economía del país, según los indicadores oficiales —véanse los comentarios económicos en este mismo número de ECA y en el anterior—, se ha derrumbado, a pesar de los apoyos internacionales y los endeudamientos que han hipotecado el futuro. El caos institucional a todo nivel, y de modo especial en lo burocrático, se ha generalizado. Los sillones vacantes de altos funcionarios, los problemas de migración y la falta de timbres para el visado de Relaciones Exteriores, las arbitrarias tarifas de agua, el descontrol de los precios de consumo básico, son algunos ejemplos.

En lo social, los miles de víctimas de la represión y la desintegración de las familias y comunidades es un costo demasiado elevado para cualquier proyecto. Por otro lado, ni se han quitado banderas a la izquierda ni se la ha neutralizado, ni menos se la ha vencido; como tampoco se ha querido o podido debilitar las acciones de las bandas paramilitares controladas por civiles y militares de la ultraderecha.

En lo político, la oposición al gobierno se ha ampliado, se ha robustecido y se ha articulado. Incluso sectores a los que antes el gobierno representaba o decía representar se van volviendo críticos y aun opositores de éste. El sector militar de la oposición se ha reforzado y ha establecido zonas de control, a pesar de los operativos lanzados contra las mismas; y el sector popular y democrático ha conseguido apoyo nacional e internacional. La articulación de las fuerzas opositoras ha ido creciendo en ambos sectores: primero se constituía la Coordinadora



Revolucionaria de Masas, que aglutinaba a las organizaciones populares, y al poco tiempo surgía el Frente Democrático integrado por los partidos de oposición, el MIPTES (Movimiento Independiente de Profesionales y Técnicos de El Salvador) y otros grupos menores, para unirse inmediatamente ambas organizaciones en lo que se denominó Frente Democrático Revolucionario (FDR); por su parte, el sector militar se articulaba primero bajo la Dirección Revolucionaria Unificada (DRU), para pasar luego a constituir el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), orgánicamente articulado con el FDR.

El fracaso de las reformas, el caos nacional y el sistemático exterminio perpetrado, legitiman cada vez más el proyecto y organización de la izquierda como alternativa para el país. La polarización y la radicalización se generalizan y profundizan. La guerra civil, velada durante el año 1980 y declarada a partir de comienzos de 1981, es la consecuencia lógica del enfrentamiento entre el proyecto gubernamental y el proyecto popular.

En esas condiciones, el diálogo directo entre las dos partes se volvió inviable. Se eliminó a la persona que gozaba de autoridad moral para ser el conductor del diálogo, como lo fuera ya en repetidas ocasiones y principalmente en la crisis del primer gobierno, Mons. Romero; se eliminó también a la dirigencia del FDR, en la que se destacaban personas de trayectoria democrática y pacifista, como Enrique Álvarez Córdova; se eliminó, en fin, de la Junta de Gobierno al miembro que podía establecer un puente para el diálogo con la izquierda, el coronel

Majano. Todo parece indicar que se había optado indiscutiblemente por la solución militar. Pero con esta opción, al tiempo que se mostraba que estaban agotadas las posibilidades del pacto entre los dos sectores que detentan el poder, se llegaba a una situación sin salida en la actual correlación de fuerzas.

El conflicto salvadoreño, por otro lado, se ha internacionalizado. No se trata únicamente de los apoyos que distintos países e instancias brinden a los dos proyectos en el plano diplomático o político: la Internacional Socialista y países con gobiernos socialistas o social-demócratas al FDR, y la Democracia Cristiana Internacional, Estados Unidos y países con regímenes demócrata-cristianos o de derechas, a la Junta. En el aspecto militar también se ha internacionalizado el conflicto. Si se acusa al FMLN de haber recibido ayuda externa, la Junta cuenta con el generoso apoyo norteamericano, pródigo en armas y asesores, y no queda probadamente excluida la participación militar de Guatemala, Honduras y los ex-guardias somocistas, o de países del Cono Sur y extracontinentales.

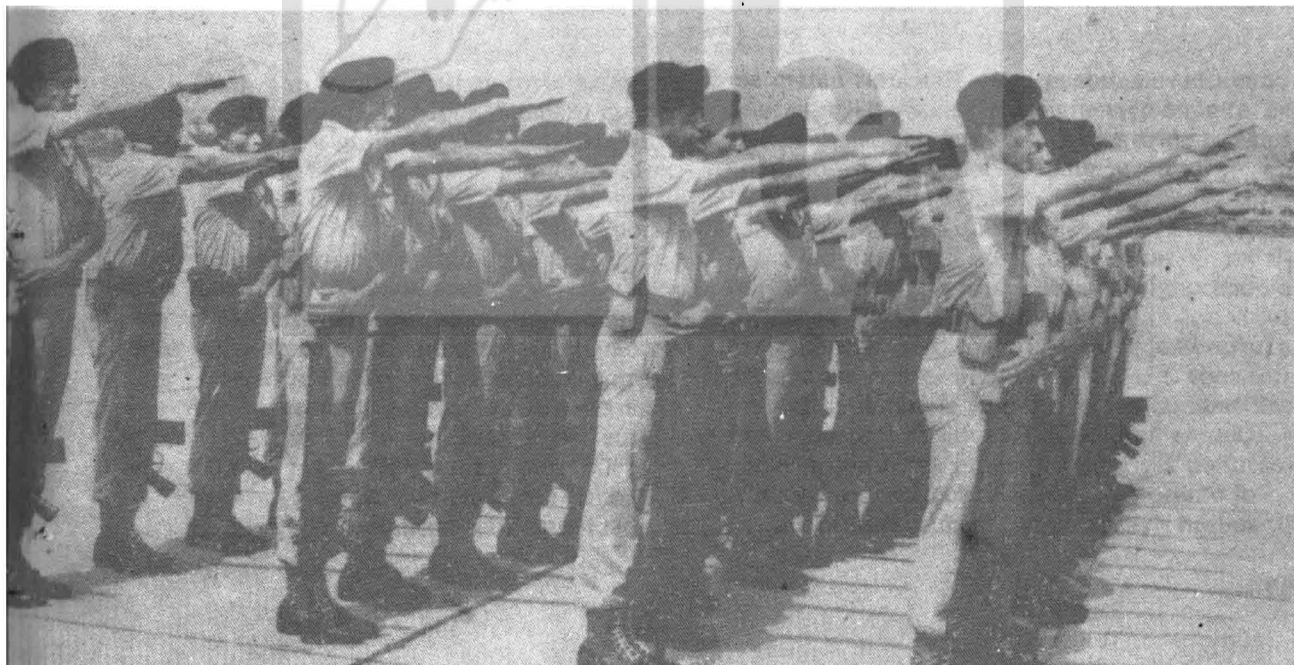
Finalmente, el punto más grave al que conduce esta fase del proceso es la enajenación de la soberanía y de la independencia nacionales. Los Estados Unidos se convierten en los verdaderos administradores del proyecto. Las reformas son programadas por ellos y su ejecución está controlada por los expertos que han enviado. La economía salvadoreña sólo puede sostenerse con el constante flujo de préstamos y ayudas que le concede EEUU. El desgaste militar ocasionado por la guerra prolongada y por la ofensiva general, obliga a los Estados Unidos a correr en ayuda urgente y masiva con municiones, armas, equipos, transportes y toda clase de apoyo logístico. La estrategia militar es dirigida por docenas de asesores militares norteamericanos que aumentan cada día. La política salvadoreña es dictada y supervisada por los Estados Unidos, que llega hasta impedir los supuestos intentos de golpes de Estado de ultraderecha. Y, lo que es el summum de la intervención, los Estados Unidos toman en sus manos la diplomacia internacional salvadoreña y la defensa del proyecto concreto de la DC y el ejército: presionan a otros gobiernos para conseguir el apoyo a la Junta, defienden pública y agresivamente el modelo salvadoreño; montan una ofensiva internacional para justificarlo, elaboran el "libro blanco", y envían delegados del más alto nivel por todo el mundo para convencer a sus aliados que el FMLN está respaldado económica y militarmente por los comunistas soviéticos, todo con el propósito de sostener el derecho que le asiste al gobierno norteamericano para involucrarse en El Salvador en defensa del sistema occidental y detener la conspiración marxista-leninista internacional en nuestro país; es así como EEUU plantea la necesidad de sostener a la Junta salvadoreña y al proyecto que sustenta, inviable a todas luces en la realidad nacional.

Frente a estos hechos, cerradas todas las vías del diálogo interno entre las partes contendientes, enajenada la autonomía del gobierno salvadoreño, fracasado y agotado el pacto político y el modelo al que servía, ausentes las condiciones mínimas para que se puedan realizar elecciones que devuelvan al pueblo su soberanía, y dado que no se vislumbra una victoria militar clara, definitiva y rápida de ninguna de las partes, es preciso buscar otros caminos de solución al conflicto salvadoreño que respondan a la realidad objetiva de los datos y del proceso.

El proyecto gubernamental ha mostrado suficientemente su incapacidad de imponer solución alguna y, de continuarse, sólo se puede esperar el progresivo exterminio del pueblo y la destrucción del país. El proyecto popular tampoco parece tener capacidad de imponerse rápidamente por la fuerza de las armas, y una guerra prolongada no llevaría más que a la destrucción todavía mayor del aparato productivo, a acrecentar la tasa de represión, y a inmolar demasiadas vidas humanas. El colonoaje impuesto por los Estados Unidos es, por otra parte, intolerable para la dignidad, la soberanía y la independencia de nuestro pueblo.

El resto de las naciones ven con interés y preocupación el proceso salvadoreño, si bien hasta el momento casi se han limitado a dar su apoyo simbólico o diplomático, y a mostrar simpatía por uno de los dos proyectos contendientes.

La radicalización y militarización del conflicto no permite visualizar otras fuerzas sociales, con suficiente base, como para presentar una tercera alternativa, a no ser la catalización de elementos oportunistas que se ofrezcan a ocupar un "centro" inexistente que de ninguna manera pararía la guerra civil ni mucho menos podría garantizar la reconstrucción nacional en un ambiente de armonía social.



Por el momento, la salida más racional parece requerir el recoger y aunar todo el caudal de conciencia manifestado por naciones, organismos internacionales y movimientos de muy diversa índole, para ejercer presión hacia una salida política para El Salvador. Las naciones del mundo deberán abandonar una actitud relativamente pasiva y expectante, no para intervenir militarmente en el conflicto, sino para detener el exterminio del pueblo salvadoreño, concretizar las declaraciones solemnes externadas en los foros internacionales y comprometerse solidariamente a mediar en el conflicto.

El primer paso a obtener es el cese a la matanza sistemática de la población civil, bombardeada y eliminada en cateos y operativos. Sobre esa primera base de derechos humanos primarios, y retirada toda la intervención extranjera que hoy tiene internacionalizado el conflicto, habrá que detener la destrucción del aparato productivo del país y forzar las condiciones justas de una verdadera tregua que permita analizar seriamente las alternativas de solución política que el momento demanda. Con estas premisas indispensables, habrá que darse a la tarea de buscar y encontrar una solución global en la que el verdadero beneficiario sea el pueblo salvadoreño, y en la que tomen las riendas del gobierno los verdaderos representantes del pueblo.

Abril de 1981.

